



**JUZGADO DÉCIMO (10°) ADMINISTRATIVO ORAL DEL  
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Ref. Proceso	11001-33-35-010-2022-00460-00
Medio de control	ACCION DE TUTELA
Demandante	MILLER SUAZA CALDERON
Demandado	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Vinculado	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES"

1.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, concordante con el artículo 1° inciso 1° del Decreto 1382 de 2000, y el Decreto 333 del 2021, se **ADMITE** la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por **MILLER SUAZA CALDERON** con cédula de ciudadanía **12.188.630**, en contra de la entidad **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)**, en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, seguridad social, debido proceso, estabilidad laboral reforzada y al trabajo.

2.- Por otra parte, se avizora que la parte accionante formuló una solicitud de medida provisional, encaminada a que se ordene a la entidad accionada **"el mantenimiento del mismo cargo que desempeña como defensor de familia del ICBF en el centro zonal de Fontibón – Bogotá, hasta tanto la entidad accionada no tenga dispuesto el lugar de su reubicación el cual debe ser de igual categoría o superior al cargo que desempeña"**, teniendo en cuenta su situación fáctica.

3.- La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente.

Dichos presupuestos son los siguientes:

- (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris).
- (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora).
- (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

4.- En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió "como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo". Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo.

Por tal razón, la solicitud de medida provisional “debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

**5.-** Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como “un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”

**6.-** En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada, aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, “la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.”

**7.-** Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que “si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”.

**8.-** Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y analizado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado considera que no se reúnen las condiciones necesarias para acceder a la medida cautelar solicitada, sin que ello implique prejulgamiento.

**9.-** En cuanto a la apariencia de buen derecho, el Juzgado constata que el accionante dentro de las documentales anexas a la demanda, no allega pruebas que permitan establecer cuáles fueron las razones fácticas y jurídicas que esgrimió el I.C.B.F., para dar por terminado su nombramiento en dicha institución. Tampoco advierte que en el escrito de tutela se hubiese allegado su historial pensional o algún otro documento que permita determinar, efectivamente, que goce del estatus de pre-pensionado, tal como lo sostiene en la demanda. Por último, una vez analizados los anexos aportados con el escrito de tutela, el Despacho advierte que solo consta registro civil de nacimiento de una menor de edad y la historia clínica del accionante, pero dichos documentos son insuficientes para dilucidar, *prima facie*, cómo está conformado su núcleo familiar y cuáles son los ingresos actuales de la familia, para adoptar una decisión que asegure la tutela judicial efectiva a fin de proteger el mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada.

Ante la falta de elementos de prueba que demuestren (i) cuál fue la motivación del acto administrativo que lo desvinculó de la entidad accionada, (ii) cuál es su situación pensional en la actualidad, es menester concluir que la medida cautelar debe ser denegada.

Será en el fallo de fondo en el que se analice el trámite administrativo que se llevó a cabo para nombrar a la persona que reemplazó al acá accionante y el respeto de los derechos pensionales del accionante al momento de su desvinculación, en caso de que la tutela cumpla los requisitos generales de procedibilidad.

En mérito de lo anterior, se dispone:

1. Por el medio más expedito, comuníquese la iniciación de la actuación al Representante Legal de la accionada **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)** y/o quien haga sus veces, a quien se les enviará copia de la tutela y sus anexos para que dentro del término de un (1) día contado a partir de la fecha de su recibo, se refiera sobre todos y cada uno de los hechos relacionados en el escrito de ésta y en especial **allegue el expediente administrativo que culminó con la desvinculación del accionante MILLER SUAZA CALDERÓN.**
2. Requiérase al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)** para que en el plazo señalado con anterioridad informe en qué cargo se encontraba nombrado el demandante y si en la actualidad existe alguna vacante que no haya sido provista mediante el sistema de concurso.
3. Hágase la salvedad a la entidad requerida de que, de no ser el funcionario competente para el conocimiento de la acción de la referencia, se remita de manera inmediata al que ostente dicha facultad, informando tal situación al Despacho. Póngase de presente la presunción de veracidad prevista en el Decreto 2591 de 1991, respecto a la omisión de no presentar informe en esta acción de tutela.
4. **NEGAR** la medida provisional solicitada en el líbelo.
5. Notifíquese mediante comunicación este auto a la parte accionante.
6. Con el valor legal que le corresponda téngase como pruebas las documentales acompañadas con el escrito de tutela.
7. OFÍCIESE a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- para que en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, allegue la historia laboral del señor MILLER SUAZA CALDERON con cédula de ciudadanía 12.188.630.
8. Requiérase al demandante **MILLER SUAZA CALDERÓN** para que en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, informe al Juzgado (i) cómo está conformado su núcleo familiar, (ii) fuente de los ingresos que percibe la familia para su subsistencia (iii) a qué monto ascienden en la actualidad dichos ingresos (iv) el fondo de cesantías al cual se encuentra afiliado y el saldo de estas al momento de su retiro.

Los documentos, respuestas, requerimientos o memoriales, deben ser allegados a través de correo electrónico a la dirección [jadmin10bta@notificacionesrj.gov.co](mailto:jadmin10bta@notificacionesrj.gov.co).

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**AUGUSTO LLANOS RUIZ  
JUEZ**

Jado

Firmado Por:

**Augusto Llanos Ruiz**  
**Juez Circuito**  
**Juzgado Administrativo**  
**010**  
**Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7ab52cdd280168618321dfa8b956c565da1958e2f84c251293bcf6c88f8ee5ab**

Documento generado en 30/11/2022 05:05:54 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**